RECOMENDACIÓN: 4/2006

EXP: CDHDF/121/05/GAM/D4232.000

PETICIONARIO: ALBERTO VENTURA TOLENTINO

AGRAVIADO: ALBERTO VENTURA TOLENTINO

AUTORIDAD RESPONSABLE: SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS
A LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO.

CASO: FALTA O DEFICIENCIA EN LA FUNDAMENTACIÓN
O MOTIVACIÓN, OBSTACULIZACIÓN U OMISIÓN DE
OBSERVAR LA LEY O NORMATIVIDAD APLICABLE,
OBSTACULIZACIÓN, NEGACIÓN O INJERENCIAS
ARBITRARIAS EN EL DERECHO AL TRABAJO Y
OBSTACULIZACIÓN, INJERENCIAS ARBITRARIAS O
ATAQUES A LA PROPIEDAD PRIVADA.

DERECHOS HUMANOS VIOLADOS: DERECHO A LA SEGURIDAD
JURÍDICA,
EN RELACIÓN CON LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO
PROCESO, DERECHO AL TRABAJO, DERECHO A LA PROPIEDAD
PRIVADA EN RELACIÓN AL DERECHO A LA PROTECCIÓN CONTRA
INJERENCIAS ARBITRARIAS Y ATAQUES A LA PROPIEDAD PRIVADA.

LIC. MARTHA PATRICIA RUIZ ANCHONDO

JEFA DELEGACIONAL EN GUSTAVO A. MADERO, DISTRITO FEDERAL.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los cinco días del mes de marzo de dos mil seis. Visto el estado que guarda el expediente de queja citado al rubro y toda vez que se ha concluido la investigación del mismo en la que se acreditó la violación a derechos humanos, la Segunda Visitaduría formuló el proyecto de Recomendación, mismo que fue previamente aprobado por el suscrito, en términos de lo establecido por los artículos 3o, 17 fracciones I, II y IV, 24 fracción IV, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como los artículos 136, 137 al 144 de su Reglamento Interno.

La presente Recomendación se dirige a la Jefa Delegacional en Gustavo A. Madero, del Distrito Federal, como titular de ese Órgano Político Administrativo Desconcentrado, en términos de lo dispuesto en los artículos 1º, 87 párrafo tercero, 104 y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2º, párrafo tercero, 3º fracción II, 10, fracción VII, 11, párrafo séptimo y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y 120, 121, 122, fracción I, 122 BIS, fracción VII, inciso F y demás aplicables del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

En observancia a lo previsto por el artículo 139 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se procede al desarrollo de los rubros que a continuación se enumeran:

1. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS VIOLATORIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS.

1.1. El 21 de junio de 2005, esta Comisión recibió la queja del señor Alberto Ventura Tolentino, a la que se le asignó el expediente citado al rubro y en la que refirió que:

En el año 2002 ocupaba un espacio en la Plaza Comercial Ferro, ubicada en las calles de A. Herrera entre 5 de febrero e Hidalgo, Colonia Aragón La Villa, Delegación Gustavo A. Madero, Código Postal 07000. Es el caso que en ese año, las autoridades delegacionales realizaron la ampliación del atrio de la Basílica de Guadalupe, la cual dio origen a la Plaza Mariana y a la construcción de un nuevo mercado público. Por tal motivo, el día 11 de febrero de 2002, celebró por escrito un convenio con el ingeniero Joel Ortega Cuevas, entonces Jefe Delegacional del Distrito Federal en Gustavo A. Madero, mediante el cual lo reubicaron de manera provisional en los espacios libres, ubicados dentro de los locales A. Herrera, entre las calles de Hidalgo y Aquiles Serdán, o bien con las propuestas presentadas por los comerciantes y de común acuerdo con las autoridades delegacionales, comprometiéndose éstas que una vez terminadas dichas obras serían considerados para la adquisición de un local comercial; sin embargo, las actuales autoridades no quieren reconocer dicho convenio y cada vez que acude para saber el trámite en que se encuentra, solamente le dan excusas y no le proporcionan información al respecto. Por lo expuesto, actualmente vive en una situación apremiante ya que esa era su única fuente de ingresos.

1.2 El 23 de junio de 2005, el peticionario en términos de los artículos 34 de la Ley de esta Comisión y 104 de su Reglamento Interno aclaró y precisó los hechos materia de la queja; al respecto manifestó que:

En 2002 ocupaba un espacio en lo que fue Ferro Plaza, ubicada en las calles de A. Herrera entre 5 de Febrero e Hidalgo, Colonia Aragón La Villa, Delegación Gustavo A. Madero, código postal 07000; es decir, era un terreno abandonado. En virtud de que las autoridades delegacionales realizaron la ampliación del atrio de la Basílica de Guadalupe, se planeó la construcción de un Nuevo Mercado Público de Ferro Plaza, por lo que el 11 de febrero de 2002 se celebró por escrito un convenio entre el ingeniero Joel Ortega Cuevas, entonces Jefe Delegacional del Distrito Federal en Gustavo A. Madero, en el que se pactó de manera provisional que quedaría ubicado sobre la calle de Hidalgo, entre Alberto Herrera y Cuauhtémoc, colonia Aragón La Villa, en la banqueta donde colocó unas láminas de acero galvanizada para vivir y trabajar vendiendo refacciones electrónicas usadas; el carácter de provisional era por un término de 10 meses y se le dio una ayuda económica mensual de \$2,000.00 por lo que recibió la cantidad de \$20,000.00; sin embargo, en dicho lugar permaneció hasta el 15 de junio del presente año, fecha en la que fue desalojado y no fue reubicado por la autoridad delegacional como se estipuló en el convenio; por ello se dirigió a la oficina de Orientación Jurídica Zona Cinco de esa Demarcación pero no ha obtenido información alguna sobre su situación jurídica, ya que en las dos ocasiones que se ha presentado le han informado que no se encuentra el ingeniero Oscar Serna.

1.3. El peticionario aportó como prueba de su dicho copia simple de un convenio que a la letra señala lo siguiente:

*GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DELEGACIÓN GUSTAVO A.
MADERO
C O N V E N I O*

Que suscriben por la Delegación Gustavo A. Madero el C. Ing. Adolfo Joel Ortega Cuevas, Jefe Delegacional; el C. Andrés Lozano Lozano, Director General Jurídico y de Gobierno; el C. Octavio Flores Millán, Director General de Desarrollo Delegacional; el C. Rogelio Zamora Barradas, a quienes por su calidad de servidores públicos en lo sucesivo se les denominará "La Delegación", y por otra parte el C. Alberto Ventura Tolentino, en su calidad de oferente o comerciante del predio denominado Ferro Plaza, a quien en lo sucesivo se le denominará "oferente y/o comerciante" de acuerdo con los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas:

A N T E C E D E N T E S

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal con fecha 9 de diciembre del año 2000 emitió el Bando Informativo número 3, mediante el cual se dan a conocer una serie de acciones relativas a dignificar la

Basílica de Guadalupe y su entorno dentro del desarrollo del Proyecto Corredor Turístico Catedral-Basílica.

La ampliación del atrio de la Basílica de Guadalupe dará origen a la creación de la Plaza Mariana y de un nuevo Mercado Público, la cual contará con todos los servicios requeridos por los visitantes en materia turística, gastronómica y comercial.

La creación de la Plaza Mariana ha recibido el beneplácito de vecinos, comerciantes y visitantes, toda vez que se considera a dicho inmueble como un centro de culto de suma importancia histórica y religiosa, además de que su diseño arquitectónico permitirá en forma armónica la realización de la actividad comercial, religiosa y turística en un lugar moderno y seguro.

DECLARACIONES

1.- De la Delegación.

1.1 Se ubica en el ámbito orgánico de la administración pública desconcentrada, con autonomía funcional y competencia, en su demarcación territorial, en las materias de gobierno, obras, servicios, actividades sociales, protección civil y seguridad pública, según lo disponen los artículos 87, párrafo tercero, 104, párrafo primero y 117, párrafo primero del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y 2°, párrafo tercero, 3° fracción II, 10, fracción VII, 11, párrafo séptimo y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

1.2 Que el C. Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento de conformidad con los artículos 105 y 117, fracciones VI y VIII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 38 y 39, fracciones VI y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 3, 19, 26, 27, 32, 33, 46, 63, 65, 77, 80, 97 y 101 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Mercados para el Distrito Federal; 1, 2, 16, 20, 112 y demás relativos y aplicables de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público del Distrito Federal.

2. Del Oferente o Comerciante

2.1. El Oferente o Comerciante que ocupa desde hace más de tres años un espacio en la Plaza comercial Ferro Plaza, ubicada en las Calles de A. Herrera entre 5 de Febrero e Hidalgo, en la Colonia Aragón La Villa, de esta Delegación.

3. Las Partes manifiestan:

3.1 Que la Delegación señala como domicilio para oír y recibir

notificaciones el ubicado en 5 de Febrero y Vicente Villada, colonia Villa Gustavo A. Madero, D. F., C. P. 07050 y por el Comerciante, el lugar en que será ubicado de manera, provisional por esta Delegación.

CLAUSULAS

PRIMERA.- De conformidad con el padrón elaborado por "la Delegación" y los "Oferentes o Comerciantes" se reconocerá a quienes aparezcan en él y que a la fecha mantengan la actividad comercial en el espacio reconocido o asignado.

SEGUNDA.- El oferente o comerciante será reubicado en los espacios libres, ubicados dentro de los locales ubicados en A. Herrera, entre la Calle de Hidalgo y Aquiles Serdán, o bien en las propuestas presentadas por comerciantes y de común acuerdo con la Delegación.

TERCERA.- La "Delegación" informa que se tiene programado la demolición de los locales actuales a partir del lunes 11 de Febrero del Presente año, por lo que el "comerciante" se compromete a reubicar sus artículos de venta y propiedades ese mismo día por la mañana, reubicación que será apoyada, si es necesario, con personal de la Delegación.

CUARTA.- El comerciante que cuente con documentación fehaciente a juicio de la Delegación, podrán solicitar la consideración de otro espacio comercial dentro del nuevo mercado que será construido.

QUINTA.- El traslado de los enseres y demás elementos de trabajo que resulten de la demolición, será trasladado al domicilio que marque el interesado en camiones de la Delegación sin costo para el comerciante.

SEXTA.- Respecto al Nuevo Mercado Público de Ferro Plaza tendrá el carácter de Mercado Público de Zona, Estará ubicado en: Alberto Herrera entre 5 de Febrero y Aquiles Serdán, y los comerciantes que firman este convenio tendrán derecho a que se les reinstale de manera gratuita y de forma definitiva. Los locales no tendrán ningún costo para los locatarios y a solicitud de los mismos no se autorizarán transferencias de locales y derechos durante cinco años.

SEPTIMA.- La Delegación apoyará la seguridad pública en el interior del mercado mediante la contratación de Policía Auxiliar y establecerá con la concurrencia de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal el mecanismo para la realización de los operativos que inhiban la práctica de conductas delictivas que afecten tanto a comerciantes como a los clientes o consumidores.

OCTAVA.- La Delegación instrumentará un programa de capacitación para los locatarios en materia de contabilidad, ventas,

calidad total en el servicio, protección civil, higiene y manejo de alimentos que les permita estar en mejores condiciones de competencia y de oferta de sus servicios y productos.

NOVENA.- Las partes coinciden en que el desbordamiento del comercio ambulante en la zona ha propiciado históricamente el detrimento del comercio establecido en los mercados públicos. Que la presencia permanente de la Policía Federal Preventiva en el atrio de la Basílica ha constituido la acción conjunta de gobierno fundamental para detener el deterioro e iniciar la reorganización y rescate de la zona. Durante el proceso de construcción de la Plaza Mariana deberá ser aprovechado para la reorganización del comercio en vía pública que permita mejorar el entorno y propiciar el respeto a la actividad comercial. Por lo anterior, ambas partes propondrán a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la emisión de un Decreto que prohíba el comercio en vía pública en la Basílica de Guadalupe y sus alrededores. Leído que fue el presente convenio y enteradas las partes de su fuerza y alcance legal, lo firman de conformidad por triplicado a los 11 días del mes de febrero de 2002.

POR LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO

Ing. Joel Ortega Cuevas
Jefe Delegacional

C. Andrés Lozano Lozano
Director General Jurídico
y de Gobierno

C. Rogelio Zamora Barradas

Director Territorial Cinco

Lic. Octavio Flores Millán

Director General de
Desarrollo Delegacional

C. Alberto Ventura Tolentino

EL COMERCIANTE

1.4. Como consta en acta circunstanciada del día 24 de junio de 2005, el peticionario se comunicó con la visitadora adjunta responsable del trámite del expediente y expresó su incertidumbre sobre el destino de sus pertenencias ya que nuevamente acudió a las oficinas de Orientación Jurídica Zona 5 de la Delegación Gustavo A. Madero, donde el personal de la misma no le informa pues le piden mayores datos del desalojo los cuales no puede proporcionar ya que nunca le notificaron ni verbal ni por escrito que iba a ser desalojado, aclaró que él no estuvo presente, cuando llegó a su lugar no había nada y los locatarios le informaron *llegaron los de la Delegación y se llevaron todas tus cosas*, por lo que desconoce el destino de ellas.

2. PRUEBAS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE Y DEMUESTRAN LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS.

2.1 Mediante oficio 2/9137-05 de fecha 27 de junio de 2005, se solicitó al licenciado Jorge González Macías, Director General Jurídico y de Gobierno en la Delegación Gustavo A. Madero, un informe sobre los hechos materia de la queja, en lo específico se pidió:

a) El fundamento y motivos legales por el cual, el 15 de junio de 2005, el señor Alberto Ventura Tolentino fue desalojado del espacio libre ubicado en la calle A. Herrera, entre las calles de Hidalgo y Cuautémoc colonia Aragón La Villa, Delegación Gustavo A. Madero.

b) En su caso, cuál fue el destino de los enseres y elementos de trabajo propiedad del señor Alberto Ventura Tolentino.

c) ¿Cuál es la situación real y jurídica del Nuevo Mercado Público de Ferro Plaza?

d) Si esa Dependencia ha respetado las cláusulas estipuladas en el convenio en referencia del cual anexó copia.

e) Sí el señor Alberto Ventura Tolentino fue considerado en el padrón elaborado por esa Delegación para los efectos de ser beneficiario de un espacio comercial dentro del referido mercado.

f) En caso negativo, la posibilidad para que el peticionario sea considerado en el padrón a efecto que se le reinstale de manera gratuita y de forma definitiva en los espacios libres.

g) ¿Qué disposición tiene esa Autoridad para atender el planteamiento del peticionario?

2.2. Al no recibirse la respuesta de la autoridad, mediante oficio 2/10144-05 de fecha 8 de julio de 2005, se le envió un primer recordatorio haciendo de su conocimiento lo previsto en los artículos 38, 62, 63, 64 y 65 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que refieren la obligación de las autoridades y servidores públicos de atender y colaborar con todos los requerimientos que haga esta Comisión para la investigación de las quejas y de la responsabilidad en que incurrir en caso de omisión o negativa.

2.3. Mediante oficio 2/10828-05 de fecha 25 de julio de 2005, se giró un segundo recordatorio.

2.4. Mediante oficio número 2/11596-05 de fecha 4 de agosto de 2005, se giró un tercer recordatorio.

Cabe señalar, que todos los oficios recordatorios tienen como fundamento los artículos invocados en el punto 2.2.

2.5. Consta en acta circunstanciada de fecha 23 de agosto de 2005, que la Directora de Área de la Segunda Visitaduría de esta Comisión entabló conversación telefónica con la licenciada Ana Cristina Rascón Córdova, Secretaria Particular de la Jefa Delegacional en Gustavo A. Madero, a quien hizo de su conocimiento las omisiones a los múltiples requerimientos de informe y solicitó su colaboración para que a la brevedad se diera la respuesta respectiva y atendieran el asunto que nos ocupa. La Lic. Rascón solicitó un listado de los asuntos pendientes de respuesta por parte de la Delegación de mérito.

2.6. Mediante oficio 045/CDHDF-SV-O5 de fecha 23 de agosto de 2005, se oficializó la petición formulada vía telefónica, y se envió el listado solicitado de todos los asuntos en los que se había requerido un informe y que éste no había sido atendido en tiempo y forma por esa Delegación.

2.7. Consta en acta circunstanciada de fecha 15 de septiembre de 2005, que personal de esta Comisión se constituyó en la Dirección General Jurídica y de Gobierno en Gustavo A. Madero, siendo atendido por el C. Juan Carlos Hermida Timoneda, Asesor de la Dirección de Gobierno, a quien hizo de su conocimiento la omisión a nuestras solicitudes de informe en el asunto que nos ocupa y pidió su intervención para que a la brevedad se realizaran las gestiones correspondientes para atender lo requerido; dicho servidor público expresó su disposición comprometiéndose a que, a más tardar, la respuesta sería satisfecha el 19 de septiembre de 2005. Sin embargo, no se recibió respuesta, ni comunicación alguna de la autoridad.

2.8. Consta en acta circunstanciada de fecha 20 de septiembre de 2005, que personal de esta Comisión en diversos horarios realizó llamadas telefónicas a fin de tener comunicación y hablar con el C. Juan Carlos Hermida Timoneda, Asesor de la Dirección de Gobierno en la Delegación Gustavo A. Madero. Las personas que contestaron informaron en toda ocasión que éste no estaba y, a pesar de que se le dejaron recados para que se comunicara con la visitadora encargada del asunto, éste en ningún momento lo hizo.

2.9. Por la tarde de ese día, se recibió la comunicación de la C. Monserrat Fraustro, personal administrativo de la referida Dirección Jurídica, quien solicitó copia de la queja y de la solicitud de informe *porque al parecer, dicha documentación no se localizaba.*

2.10. El 21 de septiembre de 2005, a las 10:52 horas, la referida documentación fue enviada vía fax al número telefónico 57 48 28 34 proporcionado para tal efecto.

2.11. Mediante oficio 2/14800-05 de fecha 10 de octubre de 2005, con fundamento en los artículos 1º, 41 fracción V, 38, 59, 61, 62, 63, 64 y 65 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; 71 fracción II, 73 y 109 de su Reglamento Interno, este Organismo dio vista a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, para que en el ámbito de su competencia se instruyera el correspondiente Procedimiento Administrativo de Responsabilidad contra los servidores públicos que omitieron y obstaculizaron la investigación de esta Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, respecto de los hechos materia de la queja formulada por el señor Alberto Ventura Tolentino.

2.12. Mediante oficio CG/DGLR/DAC/SAC/2005/14730 de fecha 13 de octubre de 2005, el licenciado Rogelio García Sánchez, Director de Atención Ciudadana de la Contraloría General del Distrito Federal, substancialmente informó que el asunto se remitió a la Contraloría Interna en Gustavo A. Madero, a efecto de que conozca de las conductas que pudieran constituir faltas administrativas de los servidores públicos adscritos a esa Delegación.

2.13. Con fecha 4 de enero de 2006, se recibió en este Organismo el oficio JUDM/1008/2005 de fecha 26 de diciembre de 2005, signado por el C. Raúl Daniel Arroyo Velasco, Jefe de la Unidad Departamental de Mercados en Gustavo A. Madero, mediante el cual informó lo siguiente:

“... a) Con fundamento en el Convenio realizado en el 2002 con las autoridades de esta Delegación en esa administración , y tomando en cuenta la Cláusula Segunda y Tercera del antes mencionado en el cual enuncia que el comerciante tendrá que desocupar su lugar para después ser reubicado, y firmando de conformidad el C. Alberto Ventura Tolentino.

b) El retiro de los comerciantes fue realizado por la Zona Territorial 5, la cual debe tener conocimiento del destino de los enseres y elementos de trabajo de los comerciantes.

c) El Mercado Ferro Plaza se encuentra en el proceso final de construcción y se cuenta con el padrón de locatarios que realizarán actividades comerciales en el mismo.

d) La delegación ha respetado cada una de las Cláusulas estipuladas en el Convenio realizado.

e) El C. Alberto Ventura Tolentino ha sido y está considerado dentro del padrón del Mercado Ferro Plaza, siendo así que ha sido beneficiado con el cumplimiento del Convenio antes señalado.

g) (sic) Las autoridades de esta dependencia están en la mejor disposición de atender todas y cada una de las peticiones realizadas por los comerciantes y dar solución a lo que a nosotros compete."

2.14. Consta en acta circunstanciada de fecha 23 de enero de 2006, que en términos del artículo 111 del Reglamento Interno de este Organismo, el señor Alberto Ventura Tolentino manifestó su inconformidad con el informe de la autoridad y refirió que:

No es verdad que se haya respetado el Convenio, en ningún momento se le notificó ni verbal, ni por escrito que tenía que dejar el lugar; la autoridad nunca le informó sobre el destino de sus mercancías de trabajo, ni tampoco cual era su situación jurídica como comerciante respecto del referido convenio y/o el Nuevo Mercado Ferro Plaza; además, en ningún momento fue atendido por el personal de la Zona Territorial 5 a pesar que en dos ocasiones se presentó para saber sobre el estado que guardaba sus propiedades; en dicho oficio se señala que el retiro de los comerciantes fue realizado por la Zona Territorial 5, sin embargo, él fue al único que lo desalojaron ya que los demás comerciantes continúan en su lugar y trabajando.

2.15. En fecha 27 de enero de 2006, se recibió el oficio DGAM/DGJG/478/2006 suscrito por el Lic. Jorge González Macías, Director General Jurídico y de Gobierno en Gustavo A. Madero, mediante el cual informa las acciones implementadas por ese Órgano Político Administrativo para la atención de la queja presentada por el C. Alberto Ventrua Tolentino, consistentes en :

"1. El oficio DGAM/DGJG/468/2006, por el cual se hace del conocimiento del C. Ventura Tolentino del Procedimiento instaurado por parte de la Unidad Departamental de Orientación Jurídica de la Dirección Territorial No. 5 en relación al resguardo de su mercancía, misma que podrá recoger en el tiempo que se

señala en el mismo; y de

2. El oficio DGAM/DGJG/469/2006 por el cual se le reconoce dentro del padrón de comerciantes beneficiados en el Proyecto Ferroplaza y señala, además su derecho a un espacio dentro del mismo.

En reiteradas ocasiones se ha intentado localizar al C. Ventura Tolentino a efecto de notificarle ambos documentos, sin haber cumplido el cometido, por lo que se está en espera de ubicar, lo más pronto posible, al quejoso para tal resultado”.

2.16. Como consta en acta circunstanciada de fecha 30 de enero de 2006, que en términos del artículo 111 del Reglamento Interno de este Organismo, el quejoso manifestó respecto del informe de la autoridad señalado en el punto 2.15, lo siguiente:

Los hechos señalados en el Acta Circunstanciada de fecha 28 de septiembre de 2004, —suscrita por C. María Angélica Benítez Roa— no sucedieron como se asentaron, ya que acudió a la cita en la Zona Cinco de esa Delegación donde fue atendido por una señora de nombre Angélica Martínez, quien lo cuestionó sobre el por qué vivía y trabaja en la vía pública, contestándoles que el lugar que ocupaba era el lugar donde fue reubicado por la Delegación Gustavo A. Madero mientras se terminaba la construcción del Nuevo Mercado Ferro Plaza y le exhibió el convenio de fecha 11 de febrero de 2002, sin embargo dicha persona hizo caso omiso a sus explicaciones.

De la fotografía que se anexa a la documentación efectivamente ese es el lugar donde vivía y ejercía su actividad laboral y de la que se puede observar que si estaba instalado. En 2005 nunca le fue notificado ni verbal, ni por escrito procedimiento alguno de desalojo por parte de las autoridades de la Delegación Gustavo A. Madero.

Respecto del oficio mediante el cual la autoridad informa sobre el resguardo de su mercancía y en el lugar donde las puede recoger, es de considerar que primero necesita ver que sus pertenencias estén completas y en buen estado, en caso que no estén completas y en buen estado no las recogería, pues poseía 4 cadenitas de oro, una pulsera, varias cosas pequeñas como celulares, herramientas de albañilería; tenía una lista de sus pertenencias pero ésta también se la llevaron así como sus documentos personales, acta de nacimiento y otros.

Respecto de la constancia de empadronamiento está de acuerdo y ya que la autoridad señala que no lo ha podido ubicar, a la

brevedad proporcionara un domicilio donde se le pueda localizar ya que a la fecha vive en la calle.

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA GENERADA POR LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL CONTEXTO EN EL QUE LOS HECHOS SE PRESENTARON.

3.1. El señor Alberto Ventura Tolentino ocupaba un espacio en la Plaza Comercial Ferro, en el que vendía refacciones eléctricas usadas y era su única fuente de trabajo e ingresos. Venía ocupando dicho espacio aproximadamente desde tres años antes a la firma del convenio —11 de febrero de 2002— suscrito con la autoridad delegacional a que se ha hecho referencia.

3.2. Con motivo del Bando Informativo número 3 de fecha 9 de diciembre de 2000, emitido por el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través del cual se dio a conocer una serie de acciones relativas a dignificar la Basílica de Guadalupe y su entorno dentro del desarrollo del Proyecto Corredor Turístico Catedral Basílica, el 11 de febrero de 2002, las autoridades de la Delegación Gustavo A. Madero y el señor Alberto Ventura Tolentino, en su calidad de oferente o comerciante y ocupante desde hace más de tres años de un espacio en Plaza Comercial Ferro Plaza ubicada en las calles de A. Herrera entre 5 de Febrero y Miguel Hidalgo, colonia Aragón La Villa, Delegación Gustavo A. Madero, realizaron un convenio en el que se pactó su reubicación provisional en los espacios libres ubicados dentro de los locales establecidos en A. Herrera entre la calle de Miguel Hidalgo y Aquiles Serdán, espacio en el que ejerció su actividad comercial —venta de refacciones eléctricas usadas— hasta el 15 de junio de 2005.

3.3 El 15 de junio de 2005, el señor Alberto Ventura Tolentino, sin motivo, ni fundamento legal y sin previa notificación fue desalojado por servidores públicos adscritos a la Delegación Gustavo A. Madero, negándole toda información tanto de su situación jurídica respecto el espacio físico en el que ejercía su trabajo, así como del destino de sus pertenencias.

3.4. Como se desprende de lo señalado en el apartado 2 de la presente Recomendación, a pesar de los múltiples requerimientos escritos, telefónicos y personales que hizo este organismo para obtener la respuesta a las solicitudes de informe, no se tuvo de forma oportuna la colaboración del Director General Jurídico y de Gobierno del Distrito Federal en la Delegación Gustavo A. Madero, ni de los servidores públicos adscritos a ese Órgano Político Administrativo con los que se

tuvo comunicación para solicitar la información sobre los hechos materia de la queja, circunstancia que constituyó un obstáculo para la investigación de las presuntas violaciones a derechos humanos en agravio del señor Alberto Ventura Tolentino, durante un lapso de 6 meses a partir del inicio de la queja.

3.5. Es hasta el mes de enero de 2006 cuando la autoridad responsable remite una serie de oficios con los que da respuesta a nuestros múltiples requerimientos de solicitud de informe.

3.6. No obstante lo anterior, de la respuesta de la autoridad y de la documentación que anexo a la misma, se desprende que:

1. El 6 de septiembre de 2004, con el número de expediente DGAM/DT5/O.J/014/200 se inicio un procedimiento al poseedor y/o propietario de los artículos varios derivados de aparatos electrodomésticos ubicados en la acera de la calle de Miguel Hidalgo entre Alberto Herrera y Cuauhtémoc, colonia Villa Gustavo A. Madero mediante el cual se le conmina para que en un plazo de 24 horas retire de la vía pública los citados enseres o bien acreditara su legal estancia ante la Unidad Departamental de Orientación Jurídica, apercibido de que en caso de no hacerlo esa autoridad Administrativa lo retiraría

2. El 7 de septiembre de 2004, la C. María Angélica Benítez Roa, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica en Gustavo A. Madero, notificó personalmente mediante cedula DGAM/DT5/O.J/690/2004 al C. Alberto Ventura Tolentino en la calle de Miguel Hidalgo S/N entre Alberto Herrera y Cuauhtémoc, colonia Villa Gustavo A. Madero el oficio DGAM/DT5/O.J/690/2004 de fecha 6 de septiembre de 2004, el cual desconocemos toda vez que el oficio que refiere que notifica es el mismo número de oficio de la Cédula de Notificación.

3. El 28 de septiembre de 2004, la servidora pública C. María Angélica Benítez Roa, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica en Gustavo A. Madero, practicó una diligencia en el multicitado lugar entendiéndose la misma con el señor Guillermo Aguas Salieron a quien le solicitó que acreditara la autorización para la colocación de los referidos enseres en la vía pública otorgándole un término de tres días hábiles para que exhiba la documentación con la que acredite la legal instalación de los mismos.

3.7. El agraviado manifestó que después del 28 de septiembre de 2004, acudió a la Zona Cinco de esa Delegación, donde explicó a la servidora pública que lo atendió que el lugar que ocupaba era el lugar donde había

sido reubicado por las mismas autoridades de la Delegación Gustavo A. Madero mientras se terminaba la construcción del Nuevo Mercado Ferro Plaza, le exhibió el convenio de fecha 11 de febrero de 2002, sin embargo dicha persona hizo caso omiso a sus explicaciones.

3.8. La autoridad responsable no acreditó el inicio de un procedimiento administrativo en el año 2005 para el retiro de los bienes propiedad del señor Alberto Ventura Tolentino; más sin embargo, de las dos fotografías que exhibió se acreditó la existencia de enseres, así como su retiro con fecha 15 de junio de 2005.

3.9. Después de 8 meses 17 días —28 de septiembre de 2004 al 15 de julio de 2005— la autoridad responsable de forma ilegal, en el lugar donde la misma autoridad delegacional reubicó al señor Alberto Ventura Tolentino, realizó el desalojo de sus bienes sin que haya acreditado la existencia de un procedimiento administrativo en el año de 2005, para el retiro o recuperación de la vía pública.

En este sentido, la Ley del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, en el artículo 93 fracción I indica que la caducidad del procedimiento administrativo iniciado a instancia de autoridad opera de oficio, a los tres meses, contados a partir de la última actuación administrativa.

Si grave es que sin previo procedimiento en que se cumplieran las formalidades de ley, la autoridad responsable ejecutó un acto de desalojo, más grave es que no realizó un inventario y/o relación de los bienes y propiedades que retiró del señor Alberto Ventura Tolentino.

3. 10. Del análisis lógico jurídico realizado a las constancias y pruebas, esta Comisión llega a la convicción siguiente:

1. Que el señor Alberto Ventura Tolentino ocupaba un espacio en Plaza Comercial Ferro Plaza, ubicada en las Calles de A. Herrera entre 5 de Febrero y Miguel Hidalgo, en la Colonia Aragón La Villa, Delegación Gustavo A. Madero como comerciante de refacciones eléctricas usadas, desde 3 años antes a la firma del convenio de fecha 11 de febrero de 2002.

2. A partir de la firma del convenio de fecha 11 de febrero de 2002, las autoridades de esa Delegación, reubicaron al agraviado en los espacios libres ubicados dentro de los locales establecidos en A. Herrera entre la calle de Miguel Hidalgo y Aquiles Serdán, espacio en el que ejerció su actividad comercial —venta de refacciones eléctricas usadas— hasta el 15 de junio de 2005, fecha

en que fue desalojado.

3. La validez y eficacia del convenio de fecha 11 de febrero de 2002, celebrado entre las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, en particular con la Delegación Gustavo A. Madero y el C. Alberto Ventura Tolentino en su calidad de oferente o comerciante del predio denominado Ferro Plaza.

4. La desocupación ilegal y arbitraria del espacio físico provisional que ocupaba el señor Alberto Ventura Tolentino ubicado en la calle de Miguel Hidalgo, entre Alberto Herrera y Cuauhtémoc, colonia Aragón La Villa, por parte de la autoridad delegacional, realizado el 15 de junio de 2005.

5. El desconocimiento del destino, ubicación y estado de los bienes muebles, propiedades y posesiones que vendía y que constituían el patrimonio laboral del ahora agraviado por parte de la autoridad delegacional.

3.11. La conducta omisa reiterada de la autoridad responsable, contravino lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, además de que entorpeció y obstaculizó la investigación de este Organismo, por un periodo de 6 meses, ya que no proporcionó en tiempo y forma, a pesar de los múltiples requerimientos escritos y verbales, la documentación e información que se le solicitó; asimismo, contravino lo previsto en el artículo 47 fracción XXIII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que les impone la obligación de proporcionar, en forma oportuna y veraz, la información y los datos solicitados por la institución a la que legalmente le compete la vigilancia y defensa de los derechos humanos, a efecto de que aquélla pueda cumplir con las facultades y atribuciones que le correspondan.

4. LA MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN EN LA QUE SE SOPORTA LA RECOMENDACIÓN:

4.1. Este organismo, en términos de lo establecido en su Ley (Artículo 2 y 3) y Reglamento Interno (Artículo 4) tiene la obligación legal de proteger y defender los derechos humanos no sólo en los términos establecidos en la norma interna sino en los instrumentos internacionales aplicables a la materia que en términos del artículo 133 Constitucional son Ley Suprema de la Nación y por lo tanto norman los criterios de su actuación; tal es el caso de la resolución A/RES/48/134, de 20 de diciembre de 1993, denominada Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y

promoción de los derechos humanos (*Principios de París*), resolución que establece como responsabilidad de los organismos nacionales de protección de derechos humanos la promoción y defensa de las personas de acuerdo con el derecho internacional de la materia (Apartado A, punto 3, inciso b); por ello, del análisis y valoración de las pruebas recabadas, esta Comisión llega a la convicción de que se violaron los derechos humanos siguientes:

4.2. Del análisis lógico–jurídico realizado a las constancias y evidencias del presente caso, se advierten elementos que acreditan violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, en relación con las garantías del debido proceso, derecho al trabajo, derecho a la propiedad privada en relación al derecho a la protección contra injerencias arbitrarias y ataques a la propiedad privada del señor Alberto Ventura Tolentino, cometidas por servidores públicos adscritos a la Delegación Gustavo A. Madero, derivadas de los actos y/u omisiones consistentes en el ejercicio indebido de la función pública al habersele desalojado sin motivo, ni fundamento legal del espacio físico en que desarrollaba su actividad comercial y laboral; así como de sus posesiones y pertenencias dejándosele en un estado de indefensión, en razón de las siguientes consideraciones:

A) Se viola el Derecho a la Seguridad Jurídica toda vez que la autoridad sólo puede hacer aquello que expresamente le autorice la ley y además de que todo acto de autoridad debe constar por escrito, estar debidamente fundado y motivado, y en el caso materia de esta Recomendación, sin previo juicio o procedimiento, sin orden escrita, fundada y motivada, desalojó al agraviado del espacio físico en que desarrollaba su actividad laboral, lo que desde luego atentó contra el derecho a la seguridad jurídica y como consecuencia de ello se violaron concomitantemente el derecho al trabajo y el derecho a la protección contra injerencias arbitrarias a la propiedad privada.

No obstante que la autoridad dio respuesta, de ésta y de las constancias que envió no se acredita que haya existido un procedimiento legal, fundado y motivado de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, para llevar a cabo el desalojo o, en su caso, la recuperación de la vía pública que ocupaba el señor Alberto Ventura Tolentino;

A mayor abundamiento, la autoridad no exhibió el acta circunstanciada respectiva de la diligencia realizada el 15 de junio de 2005, donde se tuvo que requerir al agraviado la desocupación del lugar para posteriormente proceder al retiro de sus bienes y propiedades, sólo

exhibe dos fotografías de las que se evidencia la existencia de objetos así como su retiro. Tampoco exhibe acta circunstanciada que describa el inventario respectivo; no hay constancia de que se le notificó el destino y/o ubicación de sus bienes, por lo que se le dejó en un estado de indefensión violándose su Derecho a la seguridad jurídica.

B) Se viola el Derecho al Trabajo toda vez que la autoridad responsable lo privó de manera ilegal de ejercer el oficio, profesión, comercio o trabajo que le acomode siempre que sean lícitos, ya que el agraviado aproximadamente desde tres años antes de la firma del convenio de fecha 11 de febrero de 2002, venía desarrollando su actividad laboral, primero en la Plaza Comercial Ferro Plaza y luego, a partir de la celebración del citado convenio, en el espacio físico en que la autoridad lo reubicó, y con motivo del ilegal desalojo verificado el 15 de junio de 2005, éste fue privado de ejercer su actividad comercial, lo que ha originado un menoscabo a su patrimonio y sobrevivencia ya que esa actividad era la única fuente de ingresos para su sustento.

C) Se viola el Derecho a la protección contra injerencias arbitrarias a la propiedad privada, toda vez que la autoridad delegacional retiró de forma ilegal y privó arbitrariamente al agraviado de sus propiedades, pertenencias o posesiones que constituían su patrimonio laboral. En este sentido, cabe mencionar que los ordenamientos jurídicos establecen que toda persona tienen derecho al uso y goce de sus bienes y que ninguna puede ser privada de éstos, excepto mediante el pago de indemnización justa y en los casos y según las formas establecidas por la ley.

4.3. En efecto, el 11 de febrero de 2002, las autoridades de la Delegación Gustavo A. Madero, como Órgano de la Administración Pública Desconcentrada del Distrito Federal y el señor Alberto Ventura Tolentino, en su calidad de comerciante y ocupante desde tres años antes a esa fecha, de un espacio en la Plaza Comercial Ferro Plaza, ubicada en las Calles de A. Herrera entre 5 de Febrero e Hidalgo, en la Colonia Aragón La Villa, de esa Delegación convinieron su reubicación en un espacio libre dentro de los locales ubicados en A. Herrera, entre la Calle de Hidalgo y Aquiles Serdán.

4.4. El señor Alberto Ventura Tolentino fue reubicado por la autoridad delegacional sobre la banqueta en la que colocó unas láminas de acero galvanizada donde vivió y desarrolló su actividad laboral, lícita, permitida y conocida por la autoridad responsable —venta de refacciones electrónicas usadas— hasta el 15 de junio de 2005, fecha en que la autoridad delegacional por conducto de sus servidores públicos sin previo procedimiento en el que se agotaran las formalidades

esenciales de ley de conformidad con los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo desalojaron llevándose sus enseres laborales. El agraviado acudió a las oficinas de Orientación Jurídica Zona Cinco de esa Demarcación; sin embargo, no le brindaron información alguna sobre su situación jurídica y la de sus pertenencias.

4.5 Esta Comisión advierte que hasta la fecha de la emisión de esta Recomendación, el señor Alberto Ventura Tolentino: 1) no ha sido informado de su situación jurídica respecto del espacio físico que ocupaba, 2) no ha sido informado del destino de sus enseres laborales, 3) no ha sido reubicado en el nuevo mercado público de Ferro Plaza, como se estipuló en el convenio celebrado el 11 de febrero de 2002, impidiendo con ello realizar una actividad que le permita desarrollarse integralmente como ser humano y satisfacer sus necesidades elementales o subsistencia. Esta obstaculización ilegal e injusta viola el derecho al trabajo.

4.6. En virtud de todo lo anterior y al no tener prueba en contrario que desvirtúe el dicho del señor Alberto Ventura Tolentino, para esta Comisión quedó acreditado que los servidores públicos adscritos a la Delegación Gustavo A. Madero, al apartarse del principio de legalidad en el ejercicio de sus funciones, conculcaron el derecho a la seguridad jurídica, en relación con las garantías del debido proceso, derecho al trabajo, derecho a la propiedad privada en relación al derecho a la protección contra injerencias arbitrarias y ataques a la propiedad privada, tutelados en el artículo 5, primer párrafo, 14, 16 y 17, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los derechos previstos en los artículos 8.1, 21.1, 21.2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 14.1 y 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se refieren al derecho que toda persona tiene a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable para la determinación de sus derechos y obligaciones, entre otras, del orden administrativo, al derecho que tienen de igual protección de la ley, al derecho al trabajo y a la propiedad privada; además del compromiso que asume el Estado de garantizar el cumplimiento, por parte de las autoridades competentes que se hayan obligado en sus términos con los particulares.

4.7. Asimismo, se incumple con lo previsto en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en sus artículos II y XVIII, así como en lo dispuesto en los artículos 1, 7, 8, 23 y 30 de la Declaración

Universal de Derechos Humanos, que sustancialmente se refieren al derecho de igualdad ante la ley, al derecho a la justicia, al derecho que tiene toda persona para que se le brinde un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, al derecho a la protección contra el desempleo y que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.

4.8. Finalmente, las conductas descritas de los servidores públicos también transgreden lo ordenado por el artículo 47, fracción I de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece las obligaciones que todo servidor público tiene para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento da lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan.

5. OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE REPARAR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS.

5.1. Como se dejó asentado en el apartado anterior, la conducta de los servidores públicos de la Delegación Gustavo A. Madero, violó los derechos humanos a la seguridad jurídica, en relación con las garantías del debido proceso, derecho al trabajo, derecho a la propiedad en relación con el derecho a la protección contra injerencias arbitrarias o ataques a la propiedad privada, previstos en los artículos 8, 8.1, 21, 21.1, 21.2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 14.1 y 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, asimismo incumplió con lo previsto en los artículos II y XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como en lo dispuesto en los artículos 1, 7, 8, 23 y 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en agravio del señor Alberto Ventura Tolentino.

5.2. En términos de lo previsto por el artículo 63.1 de la citada Convención, el Estado tiene la obligación de reparar las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

Los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalan que:

El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente,

las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación.

5.3. Para garantizar plenamente los derechos reconocidos por la citada Corte, no es suficiente que el Estado emprenda una investigación y trate de sancionar a los culpables, sino que es necesario además, que toda esta actividad del Estado culmine con la justa indemnización a la parte lesionada, y que exista una efectiva restitución al derecho violado.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal considera que una efectiva restitución es la que —en el caso que proceda—, devuelve las cosas a su estado anterior.

5.4. En ese orden de ideas, podemos señalar que de conformidad con lo establecido por los artículos 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1910, 1915 y 1916 del Código Civil para el Distrito Federal, en relación con el 77 bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 12 fracción VIII, 17 fracción IV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 46 de la Ley de este Organismo, 389 y 390 fracción II del Código Financiero para el Distrito Federal, estima que en el caso resulta procedente que ese Órgano Político Administrativo Desconcentrado en Gustavo A. Madero, otorgue una indemnización al señor Alberto Ventura Tolentino, en razón del actuar de sus distintos servidores públicos.

5.5. Asimismo, de acuerdo a la necesidad de lograr una reparación integral por la violación a los derechos humanos y siguiendo los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se establecen los siguientes parámetros para la indemnización:

DAÑO MATERIAL. Está integrado tanto por el daño emergente y el lucro cesante, o bien por uno solo de ellos como es en este caso.

I. Daño emergente:

Nuestra legislación lo define en el artículo 2108 del Código Civil para el Distrito Federal como la pérdida o el menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación.

El daño emergente considera los gastos por las gestiones internas para remediar la violación y sus consecuencias.

II. Lucro Cesante.

El lucro cesante consiste en todo ingreso económico que el agraviado podría haber percibido en caso de que no hubiera sufrido un menoscabo en su persona y/o posesiones.

5.6. En este orden de ideas, se deberán realizar las acciones necesarias para que la autoridad responsable proceda a indemnizar al señor Alberto Ventura Tolentino por las violaciones a sus derechos humanos, a razón de \$2,000.00 (Dos mil pesos) mensuales a partir del 15 de junio de 2005 hasta que se dé cabal cumplimiento al convenio de fecha 11 de febrero de 2002 celebrado entre las autoridades de la Delegación Gustavo A. Madero y el señor Alberto Ventura Tolentino, toda vez que ese fue el parámetro utilizado en el año 2002 por la autoridad cuando reubicó provisionalmente al agraviado y como una ayuda económica.

5.7. Asimismo, como parte de la reparación integral del daño, la autoridad deberá:

A) Respetar y cumplir en sus términos el citado convenio de fecha 11 de febrero de 2002.

B) Dar al agraviado un local dentro del nuevo mercado público de Ferro Plaza.

C) Devolver al agraviado sus enseres laborales y, en caso de imposibilidad material para ello, pagarle el importe de los mismos.

D) Que la autoridad delegacional dé inicio a las investigaciones conducentes a efecto de que el órgano de control interno competente, deslinde la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron el desalojo y retiro de las propiedades y demás bienes del agraviado, y que evite en lo futuro, que se repitan actos violatorios de derechos humanos como el del presente caso, lo anterior de conformidad con el artículo 47, 77Bis y demás aplicables de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos.

FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE ESTA COMISIÓN PARA EMITIR LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:

Independientemente del fundamento sustantivo que ha quedado detallado en el rubro relativo a los razonamientos lógico-jurídicos que soportan la convicción para la emisión de esta Recomendación y en obvio de repeticiones innecesarias se tienen por reproducidos en este apartado, sustentan la competencia de este Organismo Público Autónomo para la emisión de esta Recomendación, los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 11, 17 fracción IV, 22 fracción IX, 24 fracción IV, 45, 46, 47, 48 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así como 2, 4, 5, 7, 10, 11, 19, 136 al 142 de su Reglamento Interno, por lo que se concluyó la investigación atendiendo a los puntos de la siguiente:

RECOMENDACIÓN:

PRIMERO: Se realice de manera inmediata la investigación procedente para identificar a los servidores públicos que llevaron a cabo el ilegal desalojo del espacio que ocupaba el agraviado para el desarrollo de su actividad comercial, así como de sus bienes, propiedades y posesiones y con el resultado de la misma se de vista a la Contraloría Interna de la Delegación Gustavo A. Madero, a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente, con los argumentos y pruebas que sirvieron a esta Comisión como medios de convicción para la emisión de la presente Recomendación, a fin de que, en el ámbito de su respectiva competencia los valore y tenga elementos en que sustentar, en su caso, su responsabilidad en los hechos que motivaron la queja.

SEGUNDO. Se proceda a la reparación de los daños causados al agraviado, en los términos descritos en el Apartado 5 de la presente Recomendación que comprende:

A) Por concepto de indemnización la cantidad de \$2,000.00 (Dos mil pesos) mensuales a partir del 15 de junio de 2005 hasta que el agraviado vuelva a ser reubicado en cualquiera de los espacios libres ubicados en A. Herrera, entre la calle de Miguel Hidalgo y Aquiles Serdán Colonia Aragón La Villa, Delegación Gustavo A. Madero, Código Postal 07000 donde pueda ejercer su actividad comercial y se le devuelvan sus bienes, propiedades y posesiones que le quitaron en el desalojo.

B) Así como que ese órgano político administrativo realice las acciones necesarias para:

1) Respetar y cumplir cabalmente el citado convenio de fecha 11 de febrero de 2002.

2) De inmediato se reconozca de forma definitiva al agraviado su derecho a ocupar un local y/o espacio en el nuevo mercado público Ferro Plaza.

3) Terminada la construcción del mercado público Ferro Plaza, asignar al agraviado, de manera inmediata, un local dentro del mismo.

4) Devolverle sus enseres laborales y, en caso de imposibilidad material para ello, pagarle el importe de los mismos o darle otros de la misma calidad y cantidad.

5) La autoridad delegacional realice las acciones necesarias a efecto de evitar en lo futuro, que se repitan actos violatorios de derechos humanos como el del presente caso.

TERCERO. Se giren instrucciones en forma escrita, precisa y contundente a los servidores públicos adscritos a ese Órgano Político Administrativo, a efecto de que den estricto cumplimiento a las disposiciones de los artículos 47 fracción I y XXI de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 59, 61, 62, 63, 64 y 65 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y se evite, con ello, casos como el de la presente Recomendación.

CUARTO. Se de vista al órgano de control interno de esa Delegación, con motivo de las omisiones de los servidores públicos que no rindieron la respuesta a los múltiples requerimientos de solicitud de informe y recordatorios de este organismo público defensor de derechos humanos, con los argumentos y pruebas que sirvieron a esta Comisión como medios de convicción para la emisión de la presente Recomendación, a fin de que, en el ámbito de su respectiva competencia los valore y tenga elementos en que sustentar su responsabilidad en los hechos que motivaron la queja.

QUINTO. Se sirva instruir a quien corresponda para que a los servidores públicos adscritos a ese Órgano Delegacional se les impartan cursos de capacitación sobre Derechos Humanos y talleres de sensibilización en la materia.

A efecto de dar cumplimiento a este punto recomendatorio, se propone que los citados cursos y talleres sean impartidos, en su caso, por el personal adscrito a la Dirección General de Educación y Promoción de los Derechos Humanos de esta Comisión, que es el área que cuenta con programas educativos que contribuyen al desarrollo de una cultura de vigencia y respeto de los derechos humanos.

En tal virtud, con fundamento en los artículos 48 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y 142 de su Reglamento Interno, se le hace saber a la titular de ese Órgano Político Administrativo en Gustavo A. Madero que dispone de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que se le notifique esta Recomendación, para responder si la acepta o no, en el entendido de que de no aceptarla, su respuesta se hará del conocimiento de la opinión pública. En caso de que acepte la misma, se le notifica que dispondrá de un plazo de 10 días, contados a partir del vencimiento del término del que disponían para responder sobre la aceptación, a fin de enviar las pruebas de su cumplimiento, las cuales deberán ser remitidas a la Dirección Ejecutiva de Seguimiento de Recomendaciones de esta Comisión, que con fundamento en los artículos 144 y 145 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, es el área responsable de calificar las Recomendaciones de acuerdo a su aceptación y cumplimiento.

Así lo determina y firma:

**MTRO. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL**